

C.A. de Valparaíso

Valparaíso, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol N° C 487-2022 del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, sobre juicio sumario de precario, caratulados “Quiñones con Quiñones”, por sentencia definitiva de primera instancia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la jueza *a quo* acogió la demanda y condenó, con costas, a la demandada doña María Mercedes Quiñones Sepúlveda a restituir a la demandante doña Olga Verónica Quiñones Sepúlveda, el inmueble que ocupa ubicado en la comuna de Quillota, Pasaje El Esfuerzo número 0184, sitio Seis manzana 42, Villa Coopreval, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, libre de todo ocupante.

En contra de este fallo la parte demandada deduce recurso de casación en la forma y apelación.

Se ordenó traer los autos en relación.

Y teniendo presente:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la parte demandada:

Primero: Que como primera causal que invoca, refiere aquella del numeral 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”, en relación a la omisión del contemplado en el N° 4 y 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, “Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia” y “La enunciación de las leyes, y en su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JQXXXXPKGZX

defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo”. Indica que el vicio que sirve de fundamento para la casación del fallo se configura toda vez que la sentencia en ninguna parte se encarga de desarrollar debida y pormenorizadamente todas y cada una de las circunstancias de hecho objeto de pleito, menos todas y cada una de las probanzas rendidas, divisándose inexistentes hasta argumentos de derecho. Carece, a su juicio, el fallo de la necesaria construcción argumentativa que ha de servir de base a la conclusión, en la especie, de encontrarse cumplidas las exigencias del artículo 2195 inciso 2° del Código Civil. Lo concreto, agrega, faltan las consideraciones de hecho y de derecho atinentes a los requisitos que exige la Ley para la “acción de precario”, a la luz de las probanzas rendidas; así como la enunciación de normas y principios supuestamente aplicables, para luego concluir en la forma que se hizo, por lo que queda de manifiesto que tales vicios sólo son reparables con la invalidación del fallo, pues de haber sido legal y correctamente ponderados cada uno de los requisitos de la acción de precario a la luz de lo efectivamente obrado en la causa, jamás pudo el sentenciador tenerlos por acreditados. Ergo, si no por falta de prueba del dominio, al menos por falta de prueba del requisito de tenencia del demandado, así como de la identidad entre lo presuntamente propio con lo pedido restituir, o bien, por probarse antecedente jurídicamente habilitante -supuestos los requisitos previos- la demanda debió quedar rechazada en todas sus partes. Agrega que, de la misma falta de motivación se colige que el sentenciador no se hizo cargo de abordar cómo, a partir de algunos documentos, colegiría sin más un derecho de dominio, en circunstancias que en nuestro sistema “nadie puede transferir ni



transmitir más derechos de los que tiene”, cuestión relevante para ponderar ese presupuesto (sic).

Reitera que de la instrumental acompañada por la contraparte, en parte alguna está probado el derecho de los antecesores en el presunto derecho que dice tener la parte demandante, y como ningún razonamiento contiene el fallo en ese sentido o, en su caso, en uno contrario, se sigue de tal omisión una infracción que fuerza la casación del fallo dictado en tales circunstancias.

Respecto a la ausencia de fundamentación, la sentencia sólo dice: “NOVENO. (...) y los que deponen por la demandada no tienen conocimiento de que cuente con un título para la ocupación. DECIMO. Así las cosas, dado que la parte demandante tiene derechos en el inmueble cuya restitución solicita, en tanto la parte demandada no ha acreditado en la causa que cuente con un título para la ocupación que realiza, se configuran los supuestos de hecho de la acción de inicio formulada, motivo por el cual será acogida en los términos que se señalarán en lo resolutivo de esta sentencia”. Ciertamente que erró la sentenciadora, desde que el fallo no recoge lo efectivamente obrado en el proceso, se configura también una deficiencia formal que implica ausencia de motivación.

Refiere, por último, en su lata exposición, que durante el pleito se probó no solamente que las partes son hermanas de doble conjunción (a través de confesional y documental), también que la demandante había permitido o autorizado la ocupación, desde antes del año 2000, lo que confesó durante audiencia de absolución de posiciones, antecedentes todos que el fallo ni siquiera analiza con el debido cuidado. De haberse ponderado más pormenorizada y detalladamente las probanzas rendidas,



ninguna duda cabe de que el destino del juicio debió ser otro, pues la demanda de precario debió rechazarse en todas sus partes.

Segundo: Que, como segundo vicio o defecto la funda en la causal 6ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, “En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio”, en relación a lo obrado y fallado por sentencia ejecutoriada en causa caratulada “Quiñones/Quiñones”, Rol C-1911-2020, seguida también ante el 2º Juzgado de Letras de Quillota, por acción de dominio, de cuya comparación se aprecian, con nitidez, los requisitos de la cosa juzgada.

La cosa juzgada, añade, se configura de forma patente, porque por sentencia definitiva de 17 de marzo de 2022 el Juez de primer grado, en aquel proceso, rechazó la acción reivindicatoria, estimando que no concurrían copulativamente los requisitos legales, entre ellos el de ser, la demandada, poseedora. En efecto, dice tal sentencia, en lo pertinente, en cuanto a su representada: “... quien al reconocer el dominio anejo tiene únicamente la calidad de mero tenedor, pero en caso alguno la de poseedor en los términos del inciso primero del artículo 700 del Código Civil. Expresa que, el fundamento inmediato de derecho se la identifica con el conjunto de hechos que fundamentan la petición, en búsqueda de la tipificación de los mismos a un aspecto concreto, los que, debidamente acreditados, persiguen se les apliquen determinadas consecuencias jurídicas. Desde ese punto de vista no se aprecian diferencias entre la acción de dominio y la de precario, no al menos en los términos en que han sido planteadas por parte de la demandante.



El yerro de la sentenciadora es evidente, porque el requisito de “causa de pedir” no ha podido depender de las solas expresiones distintas del demandante, empleadas en uno y otro pleito, pues ello significaría que el requisito en comento dependería, siempre y necesariamente, del mero arbitrio del actor, conculcando el derecho del demandando a libertarse de un proceso judicial seguido en su contra a través de la fuerza de cosa juzgada impuesta por uno anterior, no obstante concurrir los demás requisitos legales.

Tercero: Que, por último, invoca como vicio de casación forma el numeral 9 del artículo 768 del Código ya citado, esto es “haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad”, en relación con el trámite esencial del N° 4 del artículo 795: “La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión”, por no recabarse la declaración de un testigo propuesto por su parte, respecto de cuya diligencia hay tramitación pendiente. En efecto, un trámite esencial no recabado ni considerado en el fallo está representado en la declaración testimonial de doña Margarita Ada Apiolaza Bahamondes, individualizada en la lista de testigos presentada el 21 de julio de 2022, cuya declaración sigue pendiente de rendición ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana, previo exhorto. En efecto, en causa Rol E-1465-2022 del Juzgado de Letras de Villa Alemana consta que con fecha 2 de noviembre de 2022 se solicitó por el representante de la parte demandada nuevo día y hora para recibir la declaración de la testigo, y que tal solicitud está pendiente de resolución, no obstante el tiempo transcurrido. Luego, como el testimonio no llegó a ser recabado no obstante proponerse oportuna y



legalmente, implica que la sentencia adolece del mentado vicio, por cuanto ese testimonio constituye una diligencia probatoria cuya omisión ha causado indefensión, circunstancia remediable solo con la invalidación del fallo dictado en tales condiciones.

Pide se invalide el fallo recurrido, con costas, y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la excepción de contrato no cumplido y rechace la demanda.

Cuarto: Que en el recurso de casación tiene por finalidad la invalidación de la sentencia sólo por las causales que la ley establece, que tiene el carácter de extraordinario y de derecho estricto, cuyas causales se clasifican en vicios cometidos en la sentencia y otros vicios en la tramitación de la causa.

Quinto: Que, abordando el primer capítulo de casación, es dable señalar que conforme con lo dispuesto en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es causal de casación en la forma haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. A su turno, el N° 4 de este precepto señala que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento y el N° 5 le exige contener la enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia.

La jurisprudencia uniformemente ha sostenido que las necesarias consideraciones de hecho y de derecho que deben servir de sustento al fallo y que como requisito indispensable exige el N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los N° 5, 6 y 7 del Auto Acordado de la Corte Suprema de 30 de septiembre de 1920, tienden a asegurar la



justicia y legalidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos que determinaron la decisión del litigio. Por lo mismo, para dar cumplimiento al N° 4 del artículo 170 la sentencia debe establecer con precisión los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley, la apreciación correspondiente de las pruebas y las consideraciones de derecho aplicables al caso.

Dicho de otro modo, las consideraciones de hecho y de derecho que exige el ordenamiento tienen por objeto que el tribunal desarrolle en cada caso y para cada una de las conclusiones, los razonamientos que determinan su fallo, como también que lo juzgado y lo resuelto guarden conformidad con la ley.

Por todo lo expuesto es posible concluir que las sentencias judiciales, en su parte considerativa, deben contener un examen o análisis completo de la prueba rendida y de los fundamentos que sirven de base para otorgarle valor o negárselo y citar las leyes que lo sustentan. Si el fallo omite lo anterior y prescinde absolutamente de considerar, analizar y calificar la prueba o invocar el Derecho aplicable, incurre en la causal de casación del N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento. Otro tanto ocurre, por de pronto, cuando omite expresar los preceptos legales sobre cuya base se dicta la sentencia.

Sexto: Que sobre la base de lo expuesto en el motivo anterior y teniendo en consideración el contenido formal de la sentencia impugnada, no cabe sino desestimar las alegaciones en que se sustenta el recurso.

En efecto, como primera cuestión y de fácil despacho se dirá que en cuanto a la pretendida inobservancia del N° 5 del artículo 170, de la simple lectura del fallo se advierte que, previo a



la decisión, la sentencia aborda la discusión de autos y la controversia jurídica como es la acción de precario. Luego, en el motivo séptimo se cita el artículo 2195 inciso segundo del Código Civil, en especial, si se cumplen los requisitos legales, lo cual fue analizado por la jueza, y si bien puede ser conciso, no desmerece que el fallo se hizo cargo de los argumentos jurídicos de las partes. Con ello se cumple suficientemente la exigencia legal que el demandado echa en falta.

Por otra parte, en los motivos séptimo a décimo del fallo recurrido el tribunal razona acerca de cada una de las alegaciones opuestas y señala los fundamentos que tiene en consideración para desestimarlas, concluyendo que las alegaciones de la demandada no resultan atendibles.

De este modo, resulta evidente que el fallo recurrido satisface la exigencia que la parte demandada reclama, de lo que aparece que el auténtico motivo de impugnación radica no en la carencia de fundamentos, sino en que aquello que se expone en éstos no es compartido por la parte recurrente, cuestión que por cierto no constituye la causal de casación invocada. En consecuencia, puede advertirse, que el fallo impugnado aborda, en su considerando séptimo, las normas aplicables al litigio y el objeto controvertido en el mismo, mientras que en los considerandos octavo a décimo se expresa claramente cuáles son los hechos probados, la forma en que se dieron justificados y la calificación jurídica de ellos, de modo tal que no se advierte el vicio que la ocurrente denuncia.

Séptimo: Que, en segundo lugar, es dable señalar que respecto a la cosa juzgada, el Tribunal comparte la consideración realizada por el tribunal de la instancia en su resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, también apelada en esta sede, en la



que precisamente se expresa que no concurre la triple identidad exigida por el artículo 177 del Código del Procedimiento Civil, entre el presente proceso y el seguido en el Rol C-1911-2020, desde que en éste se ha accionado de precario, mientras que en el segundo se accionó de reivindicación, instrumentos procesales que constituyen una causa diversa de pedir entre sí, y que por ende, excluye la cosa juzgada alegada.

Por otro lado, que la excepción haya sido resuelta previa a la dictación de la sentencia, no tiene ninguna incidencia en el resultado del juicio, toda vez que lo fundamental es que en la especie no se configura la triple identidad. Tal como acertadamente resolvió la jueza *a quo*, en ambos procesos son entre las mismas partes, la misma cosa pedida en cuanto a la restitución del inmueble, sin embargo varía el fundamento respecto a la causa de pedir, toda vez que en la acción de precario su calidad jurídica es de mero tenedora.

En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el fundamento de la excepción es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en cuya virtud no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes sobre la misma materia. Tiende a impedir todo pronunciamiento posterior con idéntico o diverso contenido donde concurren los requisitos del artículo 177 del Código de procedimiento Civil, evitando así la incertidumbre y respetar el principio de seguridad jurídica. En tal sentido, puedes descartarse el vicio que la parte pretende por cuanto las acciones en ambos juicios no solo son distintas, y el fundamento inmediato deducido en el juicio en la presente causa lo es por considerar a la demandada mero tenedora, por lo que los hechos jurídicos y materiales en que se basa la demanda de autos obedece a una



acción de precario y no de una acción reivindicatoria, lo que permite desechar por este segundo capítulo el recurso.

Que, por último, es necesario hacer presente que igualmente la causal no podía prosperar, pues el recurso de casación forma ataca la sentencia dictada en la causa, y la excepción de cosa juzgada lo funda por una resolución dictada con anterioridad a la sentencia, respecto de la causa la parte demandada solo se alzó por medio de recurso de apelación.

Octavo: Que en lo referente al tercer capítulo de casación, consta en autos que, si bien se abrió término probatorio extraordinario en el proceso para rendir un testigo, por la parte demandada, vía exhorto ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana, lo cierto es que no consta la práctica de la diligencia dentro del referido término ni que se haya alegado entorpecimiento alguno para la rendición, o siquiera que se haya instado por su declaración ante el exhortado; y por otra parte, consta que la parte demandada, además de dicho testigo, rindió del probatorio ordinario prueba testifical consistente en la declaración de tres testigos, por lo que, a juicio de esta Corte, la falta de declaración de uno, en las circunstancias anotadas, no provoca indefensión alguna a este respecto.

En el mismo sentido, la Corte Suprema ha sostenido que la palabra indefensión, según del Diccionario de la Real Academia Española contiene dos acepciones: “falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento judicial. (Corte Suprema rol 3492-2003)

Por lo demás, parece olvidar el recurrente que el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, ordena de manera



perentoria al tribunal a citar a oír sentencia existan o no diligencias pendientes, por lo que la no realización de la diligencia testimonial no es óbice para que el tribunal dictara fallo.

En consecuencia, conforme se ha venido razonando, el recurso de casación forma será desestimado.

II.- En cuanto al recurso de apelación deducido en contra de la resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés:

Visto:

Que los argumentos vertidos en estrados no logran desvirtuar los tenidos a la vista por la jueza *a quo* en su resolución para rechazar la incidencia de cosa juzgada deducida por la demandada, por lo que compartiendo los argumentos plasmados en la resolución en alzada, esta será confirmada.

III.- En cuanto a la apelación de la sentencia definitiva:

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene además presente:

1º) Que son hechos acreditados en la causa:

a) que el inmueble sublite se encuentra debidamente inscrito a fojas 382 N°451 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quillota a nombre de la demandante Olga Quiñones Sepúlveda;

b) Que adquirió la propiedad a su madre María Sepúlveda Astorga, por compraventa de fecha 01 de febrero de 1995; inmueble que se encuentra ocupado por su hermana, la demandada María Mercedes Quiñones Sepúlveda, ingresando al inmueble con posterioridad a la compraventa que suscribió la demandante con su antigua propietaria.

2º) Que, para la existencia de la acción de precario es presupuesto de la esencia la carencia de cualquier relación



jurídica entre el propietario y el detentador de la cosa, esto es, una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo o título jurídicamente relevante. Consecuencialmente, la cosa pedida en la acción de precario, esto es, la restitución o devolución de una cosa mueble o raíz, encuentra su apoyo en la ausencia de nexo jurídico entre quien tiene u ocupa esa cosa y el dueño de ella o entre aquél y la cosa misma.

3º) Que, por su parte, y siendo un hecho probado que las partes con hermanas de doble conjunción, la sola circunstancia de la relación de parentesco no puede ser considerado como título justificativo de la mera tenencia, tal y como lo exige la disposición del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

Por lo demás, así lo ha entendido la Corte Suprema en una sentencia de 11 de abril de 2019, al declarar que: *“Quinto: Que, como se advierte, la demandada intenta justificar su tenencia alegando el parentesco existente entre las partes, lo que en su entender excluye la situación de mera tolerancia, que intenta descartar, también, en la circunstancia de que la demandante lleva como dueña del inmueble de autos un corto periodo, en relación a los 40 años que ocupa el inmueble, por lo que no pudo tolerar tal hecho. En dicho orden de cosas, ninguno de los argumentos planteados da cuenta de la existencia de un título que pueda enervar la demanda interpuesta, pues si bien, la exigencia de título justificante previo debe ser entendido de manera amplia, no se satisface con la mera constatación de un vínculo de parentesco, siendo menester acreditar la existencia de algún antecedente que dé cuenta que la ocupación ejercida, no es un gravamen meramente soportado o tolerado por el propietario, sino que responde a una exigencia jurídicamente*



respaldada que lo pone en situación de respetarla” (Rol N° Rol 37.192-2017).

4°) Que, no habiendo demostrado la demandada que la ocupación del inmueble cuya restitución se demanda, la detenta por un título distinto de la mera tolerancia, solo cabe inferir que lo hace por la sola tolerancia de su dueña y, ocurriendo entonces la situación jurídica que se manifiesta cuando alguien detenta como mero tenedor un bien raíz de propiedad ajena, sin que medie vínculo de derecho entre el dueño del inmueble y la simple ocupante, la acción es procedente.

5°) Que, en consecuencia, los argumentos vertidos en estrados no logran desvirtuar los tenidos a la vista por la jueza *a quo* en su sentencia para acoger la acción de precario deducida, por lo que el recurso de apelación será desestimado.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en los artículos 186 y siguientes y 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

- I. Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido en contra de la sentencia definitiva de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Quillota en autos Rol C-487-2022.
- II. Que **se confirma**, la resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Quillota en autos Rol C-487-2022.
- III. Que **se confirma** la sentencia definitiva de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Quillota en autos Rol C-487-2022.



Redactada por la ministra suplente Isabel margarita Zúñiga Alvayay.

Regístrese y devuélvase.

No firma la Ministra Srta. Eliana Quezada Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar Sala el día de hoy.

Ingreso Corte Civil-863-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JQXXXXPKGXZ

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Teresa Carolina Figueroa C. y Ministra Suplente Isabel Margarita Zúñiga A. Valparaíso, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

En Valparaíso, a veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

